TONIA ETXARRI

# 'PEQUEÑECES' DE INTERIOR

Es tal la importancia que los dos titulares de Interior, el ministro Jorge Fernández Díaz y el consejero Rodolfo Ares, otorgan a la coincidencia del diagnóstico sobre el estado actual de ETA que ayer, en su primer encuentro desde que el PP llegó al Gobierno de La Moncloa, los dos quisieron quitar hierro a sus discrepancias. Que las hay, sin duda, pero, conscientes de que el final definitivo de la banda terrorista (en estado durmiente y sin intención de disolverse en breve plazo) depende en gran medida de que el discurso democrático no sufra fisuras, tanto el ministro como el consejero, tras su encuentro en el País Vasco, redujeron sus diferencias a cuestiones «muy pequeñas».

Si los detenidos en Francia pensaban utilizar o no los explosivos que llevaban, el hecho es que iban armados. Y es la propia permanencia de ETA la que obliga a no bajar la guardia y a preguntarse, por lo menos, si algunos no intentan reorganizarse en el caso de que no consigan las exigencias planteadas en la Declaración de Aiete. Si los simpatizantes de ETA recogen dinero por los comercios de los pueblos, como denunció en su día el concejal Carlos García en Elorrio, para financiar sus movimientos, no se puede hablar del 'impuesto' terrorista al uso que llegaron a sufrir los empresarios, pero parece lógico que se despierte la alarma ante unas prácticas de extorsión camufladas que tienen más de presión mafiosa que de cuestación del Domund.

Si la banda se hubiese disuelto, estos reparos no tendrían razón de ser. Por lo tanto, especulaciones aparte, que pueden haber llevado a expresiones distintas utilizadas por el ministro y el consejero, lo cierto es que, a pesar de las diferencias de matiz (también en los cambios en política penitenciaria que reclama el propio lehendakari, Patxi López), la coincidencia se centra en la necesidad de mantener la guardia en un momento de máxima dificultad en el debate político. Porque todavía ETA no ha desaparecido.

La rigidez atribuida al ministro Jorge Fernández Díaz y la flexibilidad que reclama el consejero Ares en los movimientos carcelarios coincidirán, necesariamente, en la aplicación de la ley. Las razones humanitarias en casos concretos en los que se puedan aplicar beneficios están contempladas por la legislación. El acercamiento de los reclusos está entreteniendo mucho a los partidos políticos que quieren presionar al Gobierno de Rajoy, pero, en realidad, en la hoja de ruta diseñada por el entorno político de ETA, las exigencias de la izquierda abertzale se sitúan en un peldaño superior , al hablar de la «salida» de los presos; un eufemismo de la amnistía. Una reivindicación inasumible por un Estado democrático.

Por lo demás, los presos que están en Nanclares ya firmaron, de forma individual, una declaración en la que mostraban signos inequívocos de haber abandonado los medios y los fines de la banda, reconociendo el daño ocasionado. Otros podrían seguir el mismo camino. La presión que está recibiendo el Gobierno del PP se vuelve contra ETA en cuanto llega a los nuevos responsables.

Es a ETA a la que hay que presionar para que se disuelva. Los populares no son tan masoquistas como para querer resucitar el terrorismo. Han tenido que enterrar, como los socialistas, a muchos de los suyos. Quieren que la historia de ETA se cierre sin que el Estado democrático pague un precio político por ello. De eso se trata.